



De las recientes liberaciones erróneas, de las amenazas con coronas fúnebres dirigidas a oficiales, de las llamadas “bandas de funcionarios” que fueron formalizados en diciembre, habla el coronel Mario Benítez, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, relatando cómo estas situaciones han afectado internamente. Asegura que el hacinamiento, la poca dotación de gendarmes y la instalación en el país del crimen organizado, son las principales problemáticas que han golpeado la institución. **POR ANTONIA DOMEYKO**

Son las ocho de la noche de un martes de febrero y el coronel Mario Benítez, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) y alcalde del Complejo Penitenciario de Puerto Montt, contesta por videollamada. Está en su oficina del recinto que dirige y cuenta que viene llegando de hacer un recorrido por los tribunales de Chile, una instrucción que se dio a todos los altos mandos regionales de Gendarmería, luego de que hace solo unos días se destapara el caso de liberaciones erróneas de reos. Durante el día recorrió los tribunales de Castro, Ancud y Quellón.

Fue una supervisión, pero también una retroalimentación para el mando, para saber qué se está haciendo —dice el coronel Mario Benítez, quien al igual que todos los altos mandos de la institución recibió el orden de suspender sus vacaciones el pasado jueves 12 de febrero, tras la noticia.

Internamente, explica, hubo un gran remezón. Se removieron oficiales con experiencia trabajando en tribunales, se destituyó al funcionario que tuvo participación directa en la última liberación equivocada y la situación fue también tema de conversación interna en la asociación que él preside.

—El error humano, obviamente, está sujeto a que un funcionario pueda equivocarse y entender e interpretar mal un documento o una orden o lo que escuchó en la sala. Eso puede ocurrir, porque trabajamos con funcionarios que pueden cometer errores. Ahora, lo que ha llamado la atención son las formas en que se han generado, y también hay autoridades que han señalado que no se descarta la corrupción o un tipo de sabotaje. Pero ese tipo de aseveraciones, la verdad que nosotros no estamos en condiciones de hacer, porque tiene que haber una investigación previa.

Las liberaciones erróneas son algo que siempre ha ocurrido, explica el coronel; sin embargo, aclara que no con esta frecuencia. Desde agosto de 2025 a febrero de este año han ocurrido ocho.

—El tema es que el contexto actual no admite liberaciones erróneas. Esa es la gran diferencia. La delincuencia que custodiábamos antiguamente no tenía las características de la criminalidad actual. Hoy día, estos errores para la ciudadanía no son admisibles.

—¿A qué atribuye la mayor frecuencia?

—Hoy la capacitación de nuestro personal está al debe. El personal debe tener un entrenamiento constante, pero hay que tener dotaciones para eso, y hoy no las tenemos. Nuestro personal prácticamente no puede dejar de trabajar para dedicar tiempo al entrenamiento o a la capacitación, porque si no, el sistema no funciona.

—El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, ha evitado calificar la situación que está pasando con Gendarmería como una crisis. ¿Usted diría que la institución de Gendarmería está en crisis?

—Yo creo que se encuentra en una situación crítica, porque todos estos eventos que se han generado son consecuencias de la situación

extrema en que nos encontramos operando. Hay unidades que están con un 300% de hacinamiento. Y si tenemos unidades muy sobrepasadas, es muy difícil que haya un control absoluto de las cárceles. Y la reiteración de eventos de este tipo claramente genera una crisis. Una crisis no en todos los recintos, porque son 81 unidades penales a nivel país, pero en algunos sí.

—En pocos meses ha habido varias situaciones complejas, como la formalización de más de 40 funcionarios por corrupción, las amenazas a oficiales y ahora las liberaciones erróneas...

—Todo afecta. Los casos de corrupción también son una señal de que el crimen organizado ha penetrado con fuerza dentro del sistema penitenciario y ha permeado a nuestro personal. Entonces, eso obviamente es una debilidad.

Hace 28 años que Mario Benítez es oficial de Gendarmería. Ingresó a estudiar en la escuela de la institución cuando tenía 19 años luego de egresar de un liceo de la Región de La Araucanía, donde creció.

—Supe de Gendarmería por varios de mis compañeros de curso y de liceo que estaban postulando, también tenía varios amigos y conocidos que eran gendarmes. Y un querido profesor nos conversaba siempre de las ventajas de ser uniformado, así es que me decidí por Gendarmería, de la cual me siento muy orgulloso, a pesar de los momentos difíciles —cuenta Benítez.

Comenzó su carrera en Colina 1, después estuvo en Colina 2 y luego en la antigua cárcel de Puerto Montt. Más tarde fue alcalde en la cárcel de Castro, ayudante del director original de la Región de Los Lagos, y también tuvo un paso por la Dirección Nacional de Gendarmería, en el área de recursos humanos. Ya más avanzada su carrera, lo nombraron alcalde de la cárcel de Puerto Aysén, donde además fue director regional subrogante hasta que, a fines de diciembre del año pasado, lo designaron como alcalde del Complejo Penitenciario de Puerto Montt.

A la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios se sumó como dirigente en 2018, después de 20 años en la institución, con la idea de mejorar la calidad de vida de todo el personal, lo que lo llevó en 2023 a ser electo presidente de la asociación.

Dice que desde que comenzó a trabajar por sus compañeros ha visto cómo la población penal se ha duplicado en pocos años y cómo han mutado las conductas al interior de la cárcel.

—El año 2022, en enero, la cantidad la población penal no alcanzaba a las 40 mil personas, y hoy son 65 mil. Además, se ha multiplicado de manera importante la cantidad de personas extranjeras. De un 3% pasamos a un 16%, una población que indudablemente tiene otra forma de operar. Sin embargo, tenemos las mismas dotaciones (de gendarmes) que teníamos hace 15 años, con un 50% más de población y con un perfil criminal muy distinto, que requiere más control.

—Este aumento expansivo de privados de libertad, ¿de qué manera ha afectado el control de Gendarmería en las cárceles?

—Nosotros tenemos control perimetral, que tiene muy buenos índices, es decir, hay pocas fugas. Y al interior de los recintos,

cuando tenemos una población penal que sobrepasa la capacidad, claramente el control de lo que hacen los internos diariamente es muy difícil de ejercer. Los podemos contar diariamente, sabemos cuánta población hay en cada unidad, sabemos la identidad de ellos, pero el nivel de hacinamiento impide tener una buena segregación, una buena segmentación, y claramente eso afecta el control respecto de cómo están los internos en cada recinto.

—Pese a esto, el miércoles se fugaron dos reos disfrazados de gendarmes desde la ex-Penitenciaría de Santiago.

—Es un hecho muy grave que deja entrever la crisis del sistema penitenciario. En un contexto de seguridad y control delictual que hoy no admite errores, Gendarmería ha sido ignorada en cuanto a recursos humanos y materiales para contener a 25 mil presos extras. Hemos advertido a las autoridades de Gobierno desde hace mucho tiempo de esta situación, pero no hay respuesta, no se dimensiona la gravedad, ni siquiera ha habido voluntad de aumentar un mínimo la dotación. Por el contrario, se ha tratado de sofocar la crisis llamando a retiro a las líneas de mando, a oficiales con experiencia. Esa medida solo trae más problemas, ya que lo que más necesitamos es personal. Sanciones deben haber, pero estas deben ser establecidas en un debido proceso. Las autoridades actuales descansan su responsabilidad en decisiones mediáticas pero muy ineficientes. Vamos a pedir a la nueva administración que se revisen todos estos llamados a retiro, por cuanto se ha abusado de las medidas sin que los procesos mejoren.

El ambiente en el que trabajan siempre ha sido complejo; sin embargo, explica el coronel Benítez, en las condiciones actuales está siendo aún más difícil. De hecho, los casos de suicidio de funcionarios se triplicaron en 2025 respecto del año anterior.

—Hemos tenido bastantes casos en los últimos meses. Tenemos la tasa más alta de suicidios en el sector público y eso es muy preocupante. Ya da cuenta de que la salud mental de nuestros funcionarios. Las condiciones laborales tienen que mejorar sí o sí. Son gente joven, que toman estas decisiones, porque el sistema es bastante nocivo para la salud mental, no es un trabajo fácil.

Después de la pandemia, a vista de todos, comenta el coronel Benítez, se comenzaron a extender dentro y fuera de las cárceles nuevas formas y estilos para delinquir. Una de ellas, y que impactó directamente a Gendarmería, fueron las amenazas con coronas de flores fúnebres a oficiales de la institución. Cuatro fueron las amenazas con nombre y apellido, la primera fue en abril a un oficial a quien le enviaron una corona a su casa en Cauquenes. En septiembre, se dejó otra corona afuera de la cárcel de Talagante, dirigida al alcalde del recinto. Unas semanas después, se dejó una afuera de la ex-Penitenciaría para un capitán. Y en diciembre, se identificaron otros dos arreglos florales con nombres de dos oficiales afuera del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur.

—Las amenazas son parte del trabajo, pero ahora se ha concentrado bastante en los oficiales. Las coronas de flores son las típicas amenazas que vienen desde los modos operantes del crimen organizado en el extranjero. Esperemos que esto llegue hasta ese punto, porque seguidamente en otros países, lo que dicen las experiencias, es que ha habido hechos de violencia, asesinatos del personal penitenciario, especialmente de la jefatura. Por lo que hemos visto, se atribuye a la toma de decisiones, traslado de internos o sanciones disciplinarias.

En el caso de los cuatro oficiales amenazados con arreglos de flores fúnebres, fueron resignados de sus cargos, dejando las cárceles en las que estaban operando.

—Si hay un oficial que controla mucho, que aplica el reglamento como está diseñado en la ley, obviamente que va a correr el riesgo de esta amenaza. Y, claro, el crimen organizado logra su objetivo.

—¿Sacar al oficial de la cárcel?

—Exacto.

En la medida de lo posible, estos oficiales han intentado mantener su anonimato y hasta la fecha no han hablado con la prensa.

—Esto genera en las familias temor y conmoción, porque hay hijos de por medio, hay esposas que no entienden cómo funciona esto, sienten un riesgo y se restringen sus posibilidades de llevar una vida normal. Están con custodia policial, no pueden salir libremente a las calles.

La primera amenaza con corona de flores afuera del domicilio de uno de los oficiales, y que incluyó una serie de disparos a la vivienda, dejó ver además la posible corrupción de algunos funcionarios. Según lo que ha revelado parte de la investigación en curso del caso, los datos personales, como la dirección particular, se habrían filtrado internamente.

—En ese momento, ¿cómo impactó esa información a los oficiales de Gendarmería?

—Hay bastante preocupación. Indudablemente, hay una merma a la confianza de con quiénes estamos trabajando.

—A eso se sumó la formalización de más de 40 gendarmes en diciembre en el llamado caso Apocalipsis, en el que se habla de “bandas de funcionarios” en la cárcel de Santiago 1.

—Claramente, la operación Apocalipsis dio cuenta de que había coordinaciones del personal o de exfuncionarios que traspasaron la legalidad, que adquirieron compromisos con internos, que ingresaban elementos prohibidos y que había una organización, porque entre ellos había comunicaciones. Por lo tanto, claro que se generó una red interna de muchas cosas más. Pero Santiago 1 es un ejemplo de donde no hay que llegar, donde quizás ha habido ausencia, no quiero decir de control, sino que ausencia de observación de las prácticas que ahí se fueron incubando. Y lo otro es que Santiago 1 es una unidad que tiene solamente imputados y tiene una capacidad de 2.553 internos, que se amplió a 4 mil, pero hoy tiene 6.890 internos. Al triple de su capacidad.

—¿Esto instaló una mayor desconfianza interna?

—Preocupación por la cantidad de funcionarios involucrados, porque los alcances de esa red criminal han sido amplios. O sea, alcanzó al 10% de la dotación de la unidad y a lo mejor la investigación puede alcanzar a más. Es muy preocupante, pero a la vez también ha generado cierta confianza en que está la capacidad para poder detectar estos malos elementos y expulsarlos. No solamente los oficiales son quienes están en contra de la corrupción, la mayoría de nuestros funcionarios, que son honestos, están en la misma línea. Pero no se puede desconocer que hay bastante poder por parte de las organizaciones criminales para corromper a agentes del Estado. Ha pasado en el Ejército, en las Fuerzas Armadas, en las policías; es preocupante a nivel país.

Explica el coronel que, paralelamente, desde el año pasado, él ha detectado una mayor cantidad de renuncias por parte de oficiales superiores.

—Hemos tenido más renuncias de lo común, de mayores, coroneles, por distintas razones —explica y agrega—. Las amenazas, las condiciones laborales y la falta de proyección generan que el personal no sienta motivación para seguir perteneciendo a la institución. El tema de la próxima reforma a Gendarmería es un tema que preocupa también al personal, pero tenemos la confianza en que es el primer paso para que Gendarmería mejore.

—Recientemente, el Presidente electo, José Antonio Kast, visitó las cárceles diseñadas por Bukele. ¿Qué se piensa de la posibilidad de que se replique ese tipo de cárceles en Chile?

—No creo que se replique exactamente el modelo de Bukele porque ha visitado El Salvador, pero también Italia. Han observado distintos modelos. Lo que sí es importante señalar es que nos parece muy bien que el Presidente electo tenga en el centro de su agenda el sistema penitenciario. Eso no lo habíamos visto en administraciones ni en candidaturas anteriores. S